**COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
PERIODO LEGISLATIVO 2022 - 2026.
372ª LEGISLATURA**

1

**ACTA DE LA SESIÓN N°86
MIÉRCOLES 17 DE ABRIL 2024, DE 15:14 A 17:17 HORAS.**

SUMA

1.- Continuó la discusión del proyecto que "Fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, modificando al efecto el artículo segundo de la ley N° 20.417, y regula otras materias que indica", boletín N° 16553-12. Urgencia simple.

2.- Continuó la discusión del proyecto de ley que modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros, boletín N°15388-12.

ASISTENCIA

La sesión fue presidida por el presidente, diputado Félix González Gatica.

Asistieron, las diputadas y diputados miembros de la Comisión: Sara Concha, Eduardo Cornejo, Félix González, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Daniel Melo, José Carlos Meza, Camila Musante, Francisco Pulgar, Hugo Rey, Clara Sagardia y Marisela Santibáñez.

Para el primer punto, asistieron el ex Ministro del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo, junto a la abogada señora María Paz Valenzuela; el ex Subsecretario de Medio Ambiente y ex asesor Jurídico de la SMA, señor Felipe Riesco; la académica e Investigadora de la Universidad del Desarrollo, en la cátedra de Derecho Ambiental, señora Camila Boettiger Philipps. Además, participaron en la discusión la Ministra del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas Corradi junto al Jefe División Jurídica, señor Ariel Espinoza Galdames y el asesor señor Rodrigo Pérez; la Superintendente del Medio Ambiente, señora Marie Claude Plumer Bodin junto a la académica señora Ximena Insunza Corvalán y la asesora señora Dusanka Inostroza Skaric.

Para el segundo punto, concurrió el señor Luis Alberto Martínez Miranda.

Asistieron a la comisión la Secretaria Abogada, señora Ana María Skoknic, asistido por el abogado Ignacio Vásquez y la secretaria ejecutiva, señora Silvia Rivas.

1

CUENTA

Se han recibido los siguientes documentos:

1.- Oficio del Secretario General (N°19379), mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados no accedió a la solicitud para remitir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su discusión, votación e informe, en carácter de comisión técnica, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar, como delito de maltrato animal, el denominado coleo de toros, correspondiente al boletín N° 16.162-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Respuesta Oficio N°: 254/12/2024 Boletín: 16162-07

2.- Oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (N°1317), mediante el cual remite glosa N°5, en cumplimiento a la Ley de Presupuestos 2024.

3.- Oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (N°1318), mediante el cual remite glosa N°4, en cumplimiento a la Ley de Presupuestos 2024.

4.- Oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (N°1321), mediante el cual remite glosa N°6, en cumplimiento a la Ley de Presupuestos 2024.

5.- Propuesta de invitados para el lunes 22 de abril de la diputada Clara Sagardía, en relación con la problemática de la instalación de proyectos eólicos en la región y sobre todo con la seguridad tanto en la instalación como en la mantención de dichas torres, ya que en el mes de febrero se cayó un aspa de una de las torres eólicas en el sector de la suerte comuna de Los Ángeles.

6.- Propuesta de invitados diputado José Carlos Meza para el debate del proyecto de ley que “Modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12.

7.- Solicitud de audiencia de la Fundación Soy del Campo, para el debate del proyecto de ley que “Modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12.

8.- Solicitud de audiencia de la Corporación Greyhound Pista Chile, para el debate del proyecto de ley que “Modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12.

9.- Solicitud de audiencia de la e Fundacion Rae, Rehabilitación Animal y Educación de la Comuna de Lampa, para el debate del proyecto de ley que “Modifica

la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12.

10.- Solicitud de audiencia de la Presidenta de Animal Naturalis Chile, para el debate del proyecto de ley que “Modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12.

11.- Copia de denuncia de la Comunidad Mapuche Williche Kacike Pairo de Apeche, por tráfico y robo organizado de madera en sitio fiscal del Fundo el Cacique de Apeche.

12.- Denuncia de Fundación Longotoma Salinas de Pullally, por hechos atentatorios en contra del área protegida, por proyectos inmobiliarios ilegales de venta de derechos que afecta gravemente la continuidad del Santuario de la Naturaleza Humedal Salinas de Pullally Dunas de Longotoma.

VARIOS

Hubo intervenciones varias que se materializaron en acuerdos.

ACUERDOS

Durante la sesión, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1. Oficiar a la Superintendente del Medio Ambiente para que informe sobre el futuro proyecto de planta desalinizadora que se pretende construir en playa Arenillas Negras en la Región de Arica y Parinacota, remitiendo todos los aspectos relacionados al mismo. (Solicitud diputado José Carlos Meza)

2. Acordó acoger la propuesta de invitados de la diputada Sagardía para la audiencia del lunes 22 de abril, quienes expondrán sobre la problemática de la instalación de proyectos eólicos en la Región del Biobío, especialmente debido a la caída de un aspa de una de las torres eólicas en el sector La Suerte en la comuna de Los Ángeles. (Punto 5 de la cuenta)

3. Acordó considerar a los invitados del diputado José Carlos Meza para el debate del proyecto de ley que “Modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12. (Punto 6 de la cuenta)

4. Recibir en audiencia para una próxima fecha por definir, a la Fundación Soy del Campo, para el debate del proyecto de ley que “Modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12. (Punto 7 de la cuenta)

5. Recibir en audiencia para una próxima fecha por definir, a la Corporación Greyhound Pista Chile, para el debate del proyecto de ley que “Modifica

la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12. (Punto 8 de la cuenta)

6. Recibir en audiencia para una próxima fecha por definir, a la Fundación Rae, Rehabilitación Animal y Educación de la Comuna de Lampa, para el debate del proyecto de ley que “Modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros”, boletín 15388-12. (Punto 9 de la cuenta)

7. Aumentar el plazo para el envío de nóminas de invitados, hasta el lunes 22 de abril, para el proyecto de ley que modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros, boletín N°15388-12.

ORDEN DEL DIA

1.- Continuó la discusión del proyecto que "Fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, modificando al efecto el artículo segundo de la ley N° 20.417, y regula otras materias que indica", boletín N° 16553-12. Urgencia simple.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo expuso en base a una presentación¹ que dejó a disposición de la Comisión.

Señaló que, el objetivo de este proyecto es mejorar y fortalecer las funciones de la Superintendencia del Medio Ambiente entregando nuevas herramientas, dado la antigüedad de la institucionalidad. Al respecto, opinó que es una muy buena idea, especialmente para aquellos que se han dedicado a trabajar en esta materia duran varios años.

Manifestó que existen varios desafíos que hay que enfrentar y corregir y, en ese sentido, afirmó que el proyecto de ley, aborda algunos aspectos bastante bien, en cambio, otros requieren un poco más de atención.

A modo de contexto, informó que el 2021 hasta marzo del 2022, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, encargó a la superintendencia y a un grupo de profesionales, un informe donde se levantaron 100 propuestas para fortalecer el cumplimiento de la norma de vida ambiental, que eran propuestas justamente tendientes a mejorar la gestión de la Superintendencia del Medio Ambiente, destacando cuatro.

¹ <https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmlID=3305> (Sesión 86)

Respecto al diseño de la Superintendencia del Medio Ambiente, indicó que desde que se creó la superintendencia, su misión era justamente mejorar el cumplimiento, incentivar el cumplimiento y no el castigo. Lo anterior, porque cuando se genera un efecto negativo al medio ambiente, lo que se debe hacer es recuperarlo, siendo la sanción posterior.

En cuanto a las propuestas de la iniciativa, mencionó que, en primer lugar, las vías alternativas del cumplimiento son una medida adecuada, toda vez que los largos tiempos que requiere la superintendencia para tramitar un procedimiento sancionador, desde la fiscalización, inclusive, hasta la sanción probablemente tal, en algunos casos, es de varios años. En ese sentido, opinó que es una buena idea generar un cumplimiento simplificado o especie de monitoreo, ya que no puede ser el mismo procedimiento engorroso, burocrático, complejo, de alto costo para generar pruebas, igual para todo tipo de actividad de infracción.

Asimismo, estimó lógico con el propósito de destrabar un poco la carga laboral intensa que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, particularmente por su gestión, otorgar competencias a las municipalidades para fiscalizar, particularmente, las normas de emisión de ruido, sin embargo, manifestó que existen algunos desafíos que son de índole político, particularmente, y que tienen que ver con tres cosas, haciendo alusión al presupuesto de las municipalidades, porque evidentemente no se puede considerar igual a cualquier comuna en la Región Metropolitana de Santiago con una comuna rural que tenga problemas de ruido, que no va a tener acceso a la tecnología para poder generar este mecanismo y, por otro lado, también es relevante tener una especie de igualdad de trato y capacitación, porque evidentemente, las decisiones que toma la autoridad política, lo termina decidiendo un gobierno de turno, por tanto, no deben existir decisiones arbitrarias a la hora de elegir a las municipalidades que tienen que recibir la capacitación, el presupuesto, y la necesidad de poder ejecutar las acciones para fiscalizar el ruido y generar los procedimientos que correspondan.

A propósito de los programas de cumplimiento, explicó que el mensaje dispone que existe un cuestionamiento respecto a la legitimidad de los programas de cumplimiento, cosa que no comparte, no obstante, más allá de aquello, opinó que elevar el rango legal, el impedimento de daño ambiental, es un despropósito en los programas de cumplimiento, porque justamente el programa de cumplimiento, lo que pretende hacer es volver al cumplimiento, porque la idea es justamente abordar las situaciones graves lo antes posible, y no después de un largo procedimiento laxo, precisando que se debe fomentar el cumplimiento y no castigarlo, o no hacerlo más complejo, en consecuencia, sugirió fortalecer aún más el programa de cumplimiento.

En cuanto al plazo, declaró que para generar programas de cumplimiento es imposible en 15 días, toda vez que para hacer un buen programa de

cumplimiento se requiere un montón de información, estudios y materias, porque se produce una cuestión fáctica que no está contemplada en la Ley de Repositorios de los Programas de Cumplimiento, y es que se debe hacer cargo de los efectos negativos, siendo una verdadera evaluación ambiental, por tanto, opinó que los plazos que se generan no son todavía suficientes para la generación de un buen programa de cumplimiento.

Dicho lo anterior, comentó que el requisito de adicionalidad que se establece respecto de la compensación, es una cuestión que se reconoce en la compensación particularmente, toda vez que está contemplado en la reforma tributaria a propósito del impuesto verde, que las compensaciones tienen que generar adicionalidad. Se contempla también en la evaluación de impacto ambiental a propósito de la compensación de biodiversidad, donde uno de los elementos que se realiza en la compensación de biodiversidad es que exista adicionalidad, en consecuencia, estimó que si lo exige también el Programa de Cumplimiento, se genera que la superintendencia se estaría transformando en una verdadera agencia evaluadora, siendo un despropósito, desde el punto de vista del diseño institucional.

Respecto a la autodenuncia, acotó que el mensaje del proyecto de ley hace un diagnóstico de por qué no ha funcionado, sin embargo, la verdad es mucho más simple, ya que no funciona porque el incentivo es malo, toda vez que para poder autodenunciarse, se debe tener un incentivo que valga la pena y, la iniciativa no lo toma adecuadamente. Aclaró que si uno va a ser sancionado igual por autodenunciarse, mejor se debe hacer el Programa de Cumplimiento.

En cuanto al plan de reparación, sostuvo que efectivamente hay un tema que es importante porque no hay planes de reparación y eso es una medida que debiera ser efectiva y que realmente debiera ocuparse. Sobre el punto, consultó si se va a sancionar al responsable por la conducta administrativa y si va a tener que hacer el plan de reparación, pero si lo hace mal con los requisitos que planteó la subvención, también va a ser por haberlo hecho mal, no existiendo incentivo para hacer un plan de reparación, siendo más bien un ejercicio punitivo excesivo, cuando lo que se busca, justamente es reparar el medio ambiente.

Afirmó que la misma situación ocurre respecto de las sanciones, ya que no existe en el proyecto de ley ni en el informe económico la razón técnica de por qué se deben aumentar las sanciones. Hizo presente que todas las sanciones en la SMA son muy altas, sin embargo, no hay una razón económica o una razón técnica de por qué se aumentan al doble las sanciones, cuando efectivamente son sanciones súper complejas, siendo especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas, porque las sanciones no son sólo para la gran minería, sino que para distintos rubros que en este momento administran instrumentos de gestión ambiental, quienes se van a ver probablemente afectados con esto y, si además, no existen los incentivos de los

planes de cumplimiento o la autodenuncia, con mayor razón, puede ser muy pernicioso.

Respecto de las Medidas Urgentes y Transitorias (MUT), explicó que, dado que se pretende ampliar, no hay más control jurisdiccional respecto de las MUT. Dejó en claro que efectivamente, se le pregunta en la medida urgente y transitoria a los tribunales respecto a si es que se puede o no puedo aplicar cierta medida urgente y transitoria, pero resulta que no hay ninguna revisión respecto del afectado por la medida urgente y transitoria, no se contempla un traslado al eventual afectado, por tanto, no hay posibilidad de reclamar expresamente en la ley después al tribunal respecto de esta decisión, y eso hace, finalmente, que no existe un contrapeso a esta medida urgente y transitoria. En otras palabras, afirmó que no existe un contrapeso jurisdiccional que permita revisar esta decisión y que, en definitiva, entonces permita saber si es que lo que están haciendo está correcto o no, o la decisión que pretende llevar adelante la superintendencia es o no es adecuada.

Respecto a los delitos económicos y ambientales, manifestó que pareciera ser que existe una confusión, o se van a confundir eventualmente los conceptos, particularmente en fraccionamiento, ya que el proyecto de ley pretende eliminar del fraccionamiento a sabiendas, pese a existir una discusión jurídica si el concepto “a sabiendas” implica dolo directo o dolo eventual, por tanto, se pretende bajar un poco el estándar de prueba para el fraccionamiento, siendo que en sede penal no es así, generándose una dicotomía respecto de una regulación que pretende ser más laxa, con un menor estándar en materia administrativa, pero en materia penal, no es cierto, porque se busca un dolo directo respecto de esta situación.

Por último, estimó preocupante confundir los temas porque van a haber sanciones administrativas y penales respecto de un mismo hecho y eso puede generar una difícil administración.

El ex Subsecretario de Medio Ambiente y ex asesor Jurídico de la SMA, señor Felipe Riesco manifestó que se concentraría en algunos aspectos que son relevantes, porque muchos de los aspectos ya han sido tratados muy bien expuestos por el antecesor y por otros invitados que han venido antes.

Aclaró que este proyecto de ley pretende dotar de facultades exorbitantes de fiscalización y sanción a la SMA, es decir, tener facultades exorbitantes de poderes jurídicos extraordinarios, sin control, con estándares más bajos que los existentes actualmente en la ley, es decir, tendría poder para ejercer sus facultades de forma casi arbitraria.

Hizo presente que en un estado constitucional de derecho, en que se permiten estos privilegios por la administración, también es importante que se habiliten mecanismos efectivos de control y garantía para los ciudadanos.

Respecto a la historia de la ley N°21.410, cuando se creó la Superintendencia de Medio Ambiente, señaló que fue necesario un acuerdo político muy extendido en el Senado, de todas las bancadas que promovía en su momento la ex ministra Analia Uriarte y el ex ministro Velasco, en que se firmó un protocolo de acuerdo y que llevó a la creación de los tribunales ambientales como tribunales especializados para controlar estos poderes jurídicos extraordinarios y, esto es lo que se pretende borrar con el proyecto de ley, a juicio del expositor.

En cuanto a la denuncias, opinó que no requiere ni siquiera una modificación legal, y además por la oportunidad en que se encuentra la tramitación en sede reglamentaria.

Informó que el mensaje señala que las denuncias por materia de ruido son cercanas al 50%, sin embargo, esto no se debe a un problema legislativo o a un problema de diseño institucional, sino que se debe, simple y llanamente, a que el decreto supremo, que es la norma reglamentaria que establece la norma de ruido, tiene un problema de origen que no es atribuible a ningún gobierno en particular.

Agregó que desde la creación de la ley N° 19.300 existe un problema en la forma en que se ha regulado la materia de ruido, porque antiguamente esta regulación se hacía a través del Código Sanitario, donde el objetivo era proteger la salud contra los perjuicios, peligros e inconvenientes de carácter mental o material que provengan de la producción de ruidos y que puedan afectar a los receptores cercanos, no obstante, con la dictación de la ley N° 19.300 las normas de emisión establecen que son aquellas que se miden en la fuente que lo genera y no en el receptor.

Dicho lo anterior, estimó que esta la oportunidad para que el Ministerio de Medio Ambiente, sin la necesidad de una modificación legal, adecue la norma y arregle rápidamente el 50% de las denuncias que se generan, regulando verdaderamente las fuentes fijas mediante una norma de emisión.

Respecto a los instrumentos de incentivo del cumplimiento, opinó que lo que se busca en definitiva con la propuesta es regularizar o convertir en ley una serie de prácticas que la Superintendencia del Medio Ambiente ya viene realizando, y que han sido amparadas por fallos de los Tribunales Ambientales y de la Corte Suprema.

En cuanto a la regulación que se propone por la autodenuncia, señaló que si bien no es perfecta, es un avance respecto a lo que existe actualmente, precisando que existe un problema más de fondo que es que la regulación de los requisitos y la forma en que se aprueban. Sobre el punto, afirmó que los requisitos para su presentación es materia de potestad reglamentaria del Presidente de la República, por la siguiente razón, ya se cometió un error al dejarlo en la ley y eso fue lo que generó que la autodenuncia y los planes de reparación sean un instrumento de

incentivo al cumplimiento que no funcionan, porque los estándares que se fijaron a nivel legal fueron de tal naturaleza que no constituyó verdaderamente un incentivo para los regulados.

Sobre el tema de la adicionalidad, sostuvo que es muy raro, porque la adicionalidad no es volver al cumplimiento, es ir más allá del cumplimiento y eso genera un problema en términos de derecho administrativo importante. Argumentó que con este mecanismo, la superintendencia se arrogaría la facultad para modificar las exigencias que se le establecen en la resolución de calificación ambiental o en la norma de emisión, por ejemplo, estableciendo criterios más altos sobre la base de los cuales se aprobaron los proyectos, opinando que existe un problema de competencia y también de certeza jurídica.

En cuanto a los planes de reparación, afirmó que pasa una cosa peor todavía, ya que se cambia el actual modelo de presentación voluntaria a uno obligatoria, toda vez que el proyecto de ley lo que hace es obligar a la presentación de un programa de cumplimiento, por tanto, perder el carácter de incentivo. En otras palabras, comentó que básicamente se está quitando la competencia por vía indirecta a los tribunales ambientales para conocer acciones por daño ambiental en esta materia.

A mayor abundamiento, explicó que si bien la iniciativa no lo dice expresamente, al parecer se estaría buscando que si no se presenta el plan de reparación también se deberá ejercer la acción por reparación de daño ambiental, sin decir quién la deberá ejercer. Sobre el punto, opinó que la podría ejercer la superintendencia, sin embargo, la ley N° 19.300, en la parte donde se regulan los titulares de la acción de reparación por daño ambiental, no habilita a la superintendencia para hacerlo, por tanto, por vía indirecta también se le estaría entregando, no explícitamente, pero se podría llegar a entender que la superintendencia se quedaría habilitada para el ejercicio de esta acción de reparación cuando en la actualidad dicha facultad es de la municipalidad y del Consejo de Defensa del Estado, además del directamente afectado.

Hizo presente que la superintendencia descansa en un diseño institucional en que se separan las funciones de fiscalización, de instrucción del procedimiento sancionatorio y de aplicación de las sanciones, sin embargo, existen algunas debilidades que se podrían subsanar con un nuevo diseño institucional, como por ejemplo la falta de contrapeso en el ejercicio de alguna atribución y la falta de imparcialidad política en algunas tomas de decisiones.

Explicó que es necesario dotar a la Superintendencia del Medio Ambiente de autonomía legal y eliminarla del aspecto político. Lo anterior, porque la fiscalización y sanción de los proyectos de inversión no sólo pueden ser capturados por los políticos, sino que también, por los empresarios y ambientalistas, y ese es un

peligro inminente que institucionalmente tiene la Superintendencia, por tanto, aclaró que se debe velar por la objetividad en su quehacer de fiscalización y sanción.

Por otro lado, afirmó que existen problemas de geografía de texto, por ejemplo, en el artículo 48 donde se pretende sacar la palabra “para el procedimiento sancionatorio”, generando un problema de geografía de texto porque ese artículo está bajo el párrafo tercero que habla del procedimiento sancionatorio, por tanto, instó al Ejecutivo a sincerar la posición de lo que se pretende realmente.

Respecto al artículo 54, que dice relación con un mecanismo que tiene el fiscal instructor una vez que termina de instruir el procedimiento para emitir un dictamen proponiéndole al Superintendente del Medio Ambiente la absolucón, sanción, entre otras medidas, donde el superintendente después de ese dictamen, goza de un periodo de 10 días para dictar la sanción.

Sobre el punto, informó que actualmente, ese dictamen, siendo un acto administrativo de trámite, igual que cualquier acto administrativo, es el único de todo el procedimiento que no se notifica a los intervinientes.

Por último y respecto de las sanciones, afirmó que no tiene problema con las mismas, toda vez que si uno mira el registro de sanciones, son pocas las veces que se ha llegado al máximo de sanciones y, por lo tanto, no es un problema. No obstante, opinó que si es relevante contemplar un piso para las sanciones.

La académica e Investigadora de la Universidad del Desarrollo, en la cátedra de Derecho Ambiental, señora Camila Boettiger Philipps expuso en base a una presentación² que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, recordó cuál es el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente dentro del diseño institucional, acompañado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, en que se separaron roles, y por lo tanto la superintendencia es un servicio público funcionalmente descentralizado, con autonomía relativa, porque si bien aunque es designado por el Presidente de la República a través del Sistema de Alta Dirección Pública, en la práctica los superintendentes de medio ambiente, por distintas razones han cambiado junto con cada gobierno. Entonces, efectivamente tiene una autonomía relativa respecto de la administración, lo cual no es que sea malo per se, pero se debe tener en cuenta.

Respecto a la función, aclaró que desde un principio su tarea exclusiva y excluyente era el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, opinando que lo ideal y más maravilloso sería que todas las normas se cumplieran, de que todas las RCA fueran impecablemente fiscalizadas y que solo hubiera “humo verde”, porque lo que se pretende es el cumplimiento de la normativa

² <https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmlID=3305> (Sesión 86)

de instrumentos de gestión ambiental, porque cuando eso no pasa, ya existe un problema.

Explicó que como un componente ambiental, produce un daño a las personas o un daño al medio ambiente, el superintendente tiene ciertas facultades que son distintas respecto de otros organismos de fiscalización y sanción, toda vez que tiene medidas urgentes en caso de riesgo o daño, tiene un procedimiento de fiscalización separado del de sanción, para que una cosa sea saber si se cumple o no se cumple, y otra cosa sea dar con el “garrote” en caso de corresponder.

Opinó que las sanciones son bastante importantes, incluso más que las multas, siendo las sanciones más dolorosas el cierre de los establecimientos que están funcionando y la revocación de la RCA, dejando a la industria fuera del ámbito de acción para tener que volver a empezar.

Respecto al proyecto de ley, aclaró que es muy positivo este reconocimiento a la carga que ha tenido la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre todo en denuncias ciudadanas respecto a temas de ruido, opinando que es valorable simplificar los procedimientos y otorgar la posibilidad de archivar denuncias, porque la carga es altísima y, además, se gastaban muchos recursos y funcionarios en este tema.

Hizo presente que los problemas ambientales no se solucionan, se gestionan con distintos instrumentos, no siendo solamente sancionar, sino que lo importante es que se cumplan los planes de reparación, plan de cumplimiento, entre otros.

Por otro lado, estimó valorable el procedimiento simplificado en infracciones leves también, y el tema de la competencia de las municipalidades por denuncias por ruido también hace sentido por su cercanía a las personas, también tomando en cuenta que ojalá se les den facultades junto con recursos.

A mayor abundamiento, hizo presente el proyecto de ley da la sensación de que solo se está legislando para la Superintendencia del Medio Ambiente, lo cual es correcto, porque este proyecto sólo se refiere a ella, pero no es posible aislarla en sus facultades e intervenciones respecto de los otros órganos de la institucionalidad ambiental, como es el Servicio de Evaluación Ambiental, y otros servicios del Estado.

Recalcó que se debe tener cuidado con la suspensión de funcionamiento, ya que esta siempre debiese tener una autorización judicial, toda vez que los tribunales ambientales se crearon justamente para tratar de controlar las enormes facultades de la superintendencia.

Respecto a la facultad de poder establecer medidas urgentes y transitorias a cualquier actividad industrial, incluso que no tenga instrumentos de gestión, no calzaría, porque la superintendencia y sus funciones son respecto a los

instrumentos de gestión y, no respecto de cualquier industria, inmiscuyéndose, incluso, en ámbitos sanitarios que no le corresponden.

En cuanto a la incautación directa por funcionarios de la superintendencia y otros servicios, declaró que sería el único organismo del Estado que podría incautar de esa forma sin la asistencia de personal de orden o seguridad, precisando que ni la Fiscalía Nacional Económica puede hacerlo sin la intervención de la Policía de Investigaciones de Chile, es decir, se estaría otorgando un músculo muy importante.

Respecto al aumento de las multas al doble de las actuales, reflexionó cómo puede ser que la superintendencia pueda llegar a 20.000 Unidades Tributarias Anuales, siendo el doble de la multa por un delito ambiental. Asimismo, enfatizó que no ha visto ningún informe que diga dónde está la gente que está ganando tanta plata con las infracciones que permita sostener un amento a más de 30 millones de dólares, siendo que las actuales son hasta 16 millones de dólares.

También, estimó preocupante que sea considerada infracción el rechazó de una propuesta de plan de reparación, porque quedaría a criterio de la superintendencia si le gusta o no el plan de reparación, para tener una nueva infracción.

Por último, recalcó que el programa de cumplimiento está pensado para que cuando el infractor no cumpla con su RCA, con la norma de emisión o con el instrumento que sea, pueda cumplir de todas formas, no obstante, si existe un daño ambiental se exige un plan de reparación, pero no es entendible que este solo sea después de una sanción, es decir, no se puede proponer un plan de reparación para evitar o reparar un daño ambiental, sino que se debe esperar una determinada sanción, opinando que no es un incentivo al cumplimiento

El diputado Pulgar preguntó cuáles son las garantías de la fiscalización que deberá ejercer la Superintendencia del Medio Ambiente, toda vez que el “papel aguanta mucho”.

El diputado Meza preguntó a la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de las autodenuncias y las diferencias existente con la legislación actual. Asimismo, interesa conocer cuántas fueron en 2023 y de esas cuantas mejoraron las condiciones originales, en otras palabras, si cumplieron el objetivo propuesto.

Respecto de las sanciones, consultó cuál es el fundamento de aumentar al doble las sanciones.

Por último, estimó necesario conocer que garantías tienen los empresarios de que el robustecimiento de las facultades de la autoridad medioambiental no va a terminar frenando o desapareciendo los actuales y futuros proyectos.

La Superintendente del Medio Ambiente, señora Marie Claude Plumer Bodin manifestó que el proyecto de ley no innova, respecto al diseño institucional de la Superintendencia del Medioambiente.

Ahora bien, comentó que la iniciativa fortalece los mismos instrumentos que hoy día están en la ley de la superintendencia y busca mejorar evidentemente la gestión de elementos que nadie discute, como es el tema de la oportunidad de la intervención de la superintendencia y sus tiempos de respuesta.

Respecto de los instrumentos de incentivo, aclaró que el proyecto busca fortalecer los instrumentos a partir de la experiencia de 12 años de aplicación. Afirmó que no hay un incentivo para autodenunciarse, sino lo que busca la iniciativa es mejorar cuáles son los requisitos para esa autodenuncia, sin alterar el espíritu inicial.

Hizo presente que el programa de cumplimiento es el instrumento más usado por parte de los infractores de instrumentos de carácter ambiental, a su vez, recordó que la superintendencia de medio ambiente, en caso alguno, hace evaluación ambiental y, este proyecto de ley no confunde aquello, toda vez que no existe en ninguna parte de su texto una referencia a dicha confusión.

Sostuvo que, el incentivo es que el infractor no sea sancionado, es decir, la autoridad se desprende de su potestad sancionadora en post de una finalidad mayor que es el cumplimiento ambiental.

Acotó que hoy en día el plan de reparación es un instrumento voluntario. Lo que apuesta este proyecto de ley y ahí está el incentivo, es justamente promover la reparación del daño ambiental en sede administrativa.

Respecto a cómo se genera y se mejora el incentivo actual, indicó que el plan de reparación actualmente es un fracaso, por tanto, la apuesta del proyecto es promover esa reparación en sede administrativa, para lo cual hace un incentivo que consiste en que muy anticipadamente se presente un plan de reparación y en el evento de su tramitación y aprobación, se logre una rebaja significativa en la sanción sobre el cual ese daño se configuró.

Declaró que al mejorar la autodenuncia también se coloca un incentivo cuando se autodenuncia una infracción con daño ambiental.

Puntualizó que, este proyecto de ley, en los términos que se plantea, establece un incentivo de lograr la reparación del daño ambiental, es decir, bajar la judicialización, toda vez que actualmente se prefiere ir a alegar el daño ambiental a repararlo y, por lo tanto, el objetivo que se debe buscar como institucionalidad ambiental es que la reparación del daño ambiental sea lo antes posible y no después de diez años judicializados.

Por otro lado, esbozó que hay cuestiones que se plantearon, las cuales son muy interesantes como espacio de mejora hacia el fortalecimiento, sin embargo,

también es importante precisar algunos temas, precisando que hace poco se recibió por parte de esta comisión el oficio de la Corte Suprema que se pronuncia respecto a las tres consultas que se le hicieron respecto al proyecto de ley. Sobre el punto, informó que, al menos respecto de las competencias en fiscalización, señaló que estaban correctas, en los términos planteados y regulados.

Reiteró que la propuesta efectivamente fortalece la fiscalización en materias como la posibilidad de la incautación, pero siempre con autorización del Tribunal Ambiental, asimismo, afirmó que no se altera el diseño base de la ley de la superintendencia, manteniéndose el control jurisdiccional intenso.

Señaló que, efectivamente, en la materia de medidas cautelares sin instrumento de carácter ambiental no está la referencia expuesta, por tanto, parece ser un espacio de mejora.

Instó a generar mayores instancias de observación para mejora el proyecto de ley, teniendo en consideración que todos apuntan hacia el mismo sentido que fortalecer la institución, pero también con reglas claras para efectos de fortalecer el cumplimiento ambiental.

El diputado Cornejo afirmó que no existe nada mas importante al momento de tramita una iniciativa legislativa, que tener las distinta visiones de la sociedad porque normalmente en el ejercicio de desarrollo o aplicación de una norma, cuando no ha tenido un proceso de participación, terminan impactando negativamente en el desarrollo de la sociedad, precisando que existen muchas leyes en Chile que se hicieron entre cuatro paredes y que se han transformado en malas políticas públicas.

Asimismo, hizo hincapié en evitar generar un desincentivo hacia las empresas, para no frenar futuros proyectos de inversión, siempre y cuando se cumpla la normativa vigente.

El asesor legislativo del Ministerio del Medio Ambiente, señor Ariel Espinoza clarificó algunos aspectos que se dieron en la discusión que no serían correctos jurídicamente.

Explicó que, cuando se regula la presencia en los receptores contaminantes, se está hablando de normas de calidad ambiental y son de competencia del Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Salud y, cuando se regula la emisión de los contaminantes es una norma de emisión que es de competencia del Ministerio del Medio Ambiente con el ministerio sectorial respectivo. Afirmó que no es correcto afirmar que el tema de la norma de ruido se puede resolver por una vía meramente administrativa.

Señaló que existe una estructura regulatoria que es muy precisa en esos términos y por lo tanto no es el único mecanismo, agregando que son muy

pertinentes los cambios legislativos que se están proponiendo en materia de ruidos en este proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, informó que en el proyecto de ley se están introduciendo algunas mejoras regulatorias para facilitar la interacción entre los municipios y la Superintendencia del Medioambiente.

Por otro lado, afirmó que no existe una restricción para que un causante del daño ambiental lo repare. De hecho es una obligación que está en otro cuerpo legal, donde si existe una obligación de reparar siempre el daño ambiental.

Ahora bien, indicó que el proyecto de ley establece como líneas fundamentales poder diversificar las herramientas con las que cuenta la superintendencia para reaccionar en cuanto detecta una desviación.

El ex Subsecretario de Medio Ambiente y ex asesor Jurídico de la SMA, señor Felipe Riesco Gracias aclaró que efectivamente la ley N° 19.300 dice que se debe reparar el medio ambiente conforme a esta ley y, lo que establece la ley es que es como una sentencia judicial, por lo tanto, no existe una obligación de reparación erga omnes per se, sino que es a través del ejercicio de la acción de reparación por daño ambiental cuyo titular era el Consejo de Defensa del Estado, el directamente afectado y la municipalidad, pero no existe una obligación per se para reparar los daños ambientales.

La académica e Investigadora de la Universidad del Desarrollo, en la cátedra de Derecho Ambiental, señora Camila Boettiger Philipps aclaró que no mirar a la superintendencia como si no estuviera metida dentro de un diseño institucional en que se aprueban proyectos y se fiscalizan, es totalmente parcial e influye en la acción de cómo se evalúan y qué proyectos se presentan por parte de las personas, toda vez que cuando quieren hacer un proyecto miran todo el sistema y no solamente una parte.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo respecto de los instrumentos y particularmente de la autodenuncia, afirmó que la sola mejora de los requisitos, en su opinión, no va a mejorar la procedencia de la autodenuncia, sino que efectivamente está dada por el incentivo a autodenunciarse, opinando que se transite en la lógica de la delación compensada.

La asesora de la Superintendencia del Medio Ambiente, señora Ximena Insunza Corvalán agradeció las observaciones mencionadas por los expositores, precisando que existen muchos espacios de mejora.

Aclaró que nadie pretende esquivar a los tribunales ambientales porque en ningún momento el proyecto ha planteado eso, es más, de hecho la eliminación de la consulta, según el informe de la Corte Suprema, viene a ratificar algo que la misma corte estima que es prudente por ser un acto posterior y por además estar avalado por las reclamaciones que hay ante las resoluciones de la

Superintendencia del Medio Ambiente, por tanto, es una impresión errada, agregando que por supuesto se pueden mejorar todas las redacciones.

2.- Continuó la discusión del proyecto de ley que modifica la ley N°20.380, sobre protección de animales, con el objeto de prohibir y sancionar la organización de carreras de perros, boletín N°15388-12.

El señor Luis Alberto Martínez Miranda en términos generales, sostuvo que hace 13 años se dedica al rescate y rehabilitación de Galgos.

Informó que estuvo viviendo muchos años en Europa, especialmente en España, donde se topó con esta raza al saber que en España 40.000 galgos son abandonados, problemática que comenzó desde hace mucho tiempo atrás.

Comenzó a tratar de dar visibilidad a esta problemática que existía en muchas partes del mundo y una vez que llegó a Chile empezó a rescatar a los primeros galgos que veía en las calles, en ciertas zonas rurales y otros lugares, percatándose que algunos perros rescatados eran de caza y otros de carreras de perros. Lo anterior, gracias a todos los años de experiencia en rescates y los informes veterinarios, donde se pudo concluir que en Chile hay abandono de estos perros.

Sostuvo que inició una dura tarea al enfrentarse con una cierta “cultura galguera” para poder saber qué es lo que ocurría dentro de esta zona, donde hay perros galgos amarrados a camionetas y una infinidad de pruebas tan fuertes de que estas prácticas traen consigo una explotación de principio a fin en estos animales.

Informó que en vez de rescatar a los perros que estaban en las calles, comenzó a denunciar a todos los domicilios donde le decían que existían perros galgos, detallando que hasta el día de hoy ha rescatado más de 200 galgos junto con la PDI, municipalidades y carabineros, donde la verdad es bastante cruda, toda vez que existen galgos en caniles amarrados a cadenas y totalmente maltratados, donde algunos están con sus órganos reventados. Agregó que una vez rescatados estos perros, solo tienen dos a tres años de esperanza de vida luego de ser adoptado.

Afirmó que lo anterior, le ha traído muchos problemas en su vida particular como activista porque actualmente tiene denunciado a 16 galgueros, de los cuales cinco tienen orden de alejamiento por amenazas de muerte.

Se comprometió a enviar todas las denuncias que tienen de galgueros porque esta situación no puede seguir así, toda vez que un galgo es un animal totalmente noble, un animal que se puede someter a estrés y que finalmente no lo puede demostrar, por tanto, es muy difícil saber de qué ese animal está sufriendo.

Contó que se ha infiltrado en las carreras de galgo y tiene pruebas que de todas las sustancias que se le inyectan a estos perros, porque no es normal que un perro de carrera tenga tal musculatura, por lo tanto, existe una sustancia que constantemente se les está inyectando.

Por último, hizo alusión al tema de la clandestinidad y las grandes apuestas que se hacen en las carreras de perros galgos, donde incluso, existe algún tipo de tráfico vinculado. Sobre el punto, afirmó que muchas municipalidades y estarían avalando este tipo de prácticas.

La diputada Santibáñez declaró que este tema tiene demasiadas aristas, desde los municipios que lo permiten, las apuestas que son ilegales y el maltrato animal.

El diputado Meza explicó que hay varios temas que se deben tratar, por ejemplo, la ludopatía.

Consultó por qué no se aplica la Ley Cholito.

El diputado González dejó en claro que en el periodo anterior perdieron por cuatro votos este proyecto de ley, en consecuencia, espera que en este periodo se pueda despachar esta iniciativa.

Respecto a la Ley Cholito, afirmó que es muy difícil su aplicación porque se debe levantar un proceso penal generando pruebas por parte del denunciante.

El diputado Cornejo comentó que se debe regular todo aquello que implique o provoque un daño, estrés y maltrato hacia los animales, pero se debe pensar donde estará el límite de lo que se va a regular.

Para mayores detalles, la sesión quedó grabada en un registro de audio y video en la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Se levantó la sesión a las **17:17** horas.

ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS
Secretaria Abogada de la Comisión